



4035686



Banco Central de la República Argentina

Expediente N° 40.356/86
RESOLUCION N° 194

Buenos Aires, **3 SET 2007**

VISTO:

El presente sumario en lo financiero N° 662, que tramita en el Expediente N° 40.356/86, instruido por Resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina N° 1371 del 27.12.89 (fs. 121) a los auditores externos del Banco del Chaco S.E.M., Contadores Públicos doctores Antonio Ramón Lezcano y Guillermo Rodolfo Oria, en los términos de los artículos 41 y 56 "in fine" de la Ley N° 21.526, en el cual obra:

I - El Informe N° 461/699 del 30.11.89 (fs. 118/20), que dio sustento a la siguiente imputación consistente en:

- Incumplimiento de disposiciones sobre procedimientos mínimos de auditoría, en transgresión a la Circular CONAU-1, Normas Mínimas sobre Auditoría Externa, Anexos II y III (Capítulos I, Aplicables para el examen de los estados contables de cierre de ejercicio, punto B. 9, 12, 28, 44 y 47 y II, Aplicables para el examen de los estados contables trimestrales, punto B. 9, 12, 28, 44 y 47).

Período infraccional: estados contables al 31.06.85 y al 31.12.85.

II - Los datos personales de los sumariados obran a fs. 120, punto III.

III - Las notificaciones efectuadas, la vista conferida y los descargos presentados, de lo que da cuenta el Informe 465-C/91/90 (fs. 196/8).

El auto del 13.09.95 que dispuso la apertura a prueba de las actuaciones (fs. 199), las notificaciones cursadas (fs. 200/4 y fs. 207), las diligencias producidas y la documentación e información agregada en consecuencia (fs. 205, fs. 208/215, fs. 216, subfs. 1/243 y fs. 219/20). El auto de fecha 10.09.01 que cerró dicho período probatorio (fs. 221), y las notificaciones cursadas (fs. 222/5), y

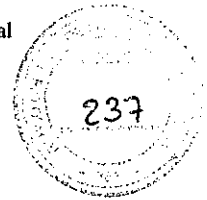
CONSIDERANDO:

I - Que previo a la determinación de las responsabilidades individuales, corresponde analizar la imputación de autos, los elementos probatorios que la avalan, y la ubicación temporal de los hechos que la motivan.

1 - Que, con relación al cargo formulado, expresa el Informe acusatorio N° 461/699/89, que la veeduría actuante detectó una serie de irregularidades contables en razón de que el ex Banco del Chaco S.E.M. transfirió fondos, entre el 03.05.85 y el 28.05.85, al Banco Popular de Rosario, por medio de la sucursal Buenos Aires, a través de varios préstamos interfinancieros por A 2.085.645,78, registrándose contablemente dicha operación con la cuenta "corresponsalia nuestra cuenta" con contrapartida "Banco Central de la República Argentina cuenta corriente", cuando las cuentas usadas

B.C.R.A.

- 4035686



debían ser utilizadas para operaciones recíprocas de corresponsalia llevadas en forma de cuenta corriente, sin plazos ni restricciones a su utilización, lo cual no se ajustaba a las condiciones de la operación que fue de 30 días con ajuste de índices combinados. Asimismo se aclara que los fondos del préstamo que aparece registrado contablemente en fecha 03.05.85, fueron en realidad transferidos el 30.04.85 (fs. 118).

Manifiesta el mencionado informe acusatorio que, finalmente, el 28 y 30 de mayo de 1985, dichos préstamos se imputaron a pérdidas en la cuenta N° 521-012 "Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera" y con la cancelación de la cuenta "Corresponsalia nuestra cuenta" (fs. 36/8), produciéndose así un ocultamiento de las operaciones efectivamente realizadas al aparecer contabilizadas como pérdidas para el Banco, destacando, a su vez, el hecho que, parte de los fondos habían sido transferidos el 21.05.85 y una semana después de ello, se los pasaba a pérdidas (fs. 119).

Se objeta que los auditores externos no efectuaron las pruebas mínimas de auditoría con ajuste a la normativa en vigor. Además, teniendo en cuenta que la operación fue registrada en una cuenta de una sucursal que prácticamente no había observado movimientos durante el ejercicio, no debió haber pasado desapercibida (fs. 119).

A los Auditores Externos Lezcano y Oria se les imputa la falta de cumplimiento de las pruebas sustantivas Nros. B. 9, 12, 28, 44 y 47: al primero de los nombrados, durante los estados contables correspondientes al segundo trimestre del año 1985 y, al segundo, quien comenzó su tarea el 27.09.85, al cierre del ejercicio anual al 31.12.85. Las irregularidades fueron observadas mediante las notas glosadas a fs. 21/2, luciendo a fs. 24 y 10 las respuestas que formularon los señores Lezcano y Oria, respectivamente (fs. 119).

1.1 - Que antes de examinar la situación de los sumariados, cabe efectuar una descripción pormenorizada de la operación no observada por los aludidos profesionales y sus principales características.

Los Partes de veeduría Nros. 3 y 4 dan cuenta del convenio firmado el 22.03.85 por el ex Banco del Chaco S.E.M. y el Banco Popular de Rosario (ver fs. 42/3), con el objeto de financiar exportaciones por intermedio del primero de los bancos citados, mencionándose, además, que el 30.04.85 se produjo la primera transferencia (A 1.325.190) desde la primera entidad bancaria hacia la otra, con el objeto de financiar una operación de exportación de azúcar con las firmas De Passe S.A. y Santa Ana S.A., con garantía del gobierno de la Provincia de Tucumán, cobertura que no pudo ser localizada (fs. 35 y fs. 85).

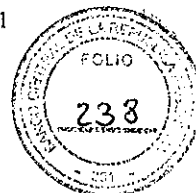
La registración de la comentada asistencia crediticia se concretó el 03.05.85 con la imputación de la cuenta "Corresponsalia nuestra cuenta" con contrapartida "Banco Central de la República Argentina cuenta corriente", efectuada de manera incorrecta no sólo por haber sido la operación contabilizada con posterioridad a la salida de los fondos, sino también porque en la primera de las cuentas se debían incluir aquellas operaciones recíprocas de corresponsalia cuando se llevaban bajo la forma de cuenta corriente, sin plazos ni restricciones a su utilización, situación que no se ajustaba a las condiciones pactadas -30 días con cláusula de ajuste de índices combinados- (Parte N° 3, fs. 36).

Con posterioridad a las fechas mencionadas en los dos párrafos precedentes, el 15.05.85, en operatoria semejante a la descripta, la mesa de dinero de la Sucursal Buenos Aires del ex

[Handwritten signature and initials]

B.C.R.A.

- 40356 86



3

Banco del Chaco S.E.M. contabilizó una transferencia de fondos al Banco Popular de Rosario de A 222.455,78; el día 21.05.85, con igual operatoria, se giraron A 150.000,00 y finalmente, el 28.05.85, de manera similar se remitieron A 385.000,00 (ver fs. 83). Las partidas citadas sumadas al monto otorgado al 30.4.85, demuestran que los fondos transferidos ascendieron a A 2.082.645,78 (ver fs. 36), no apareciendo registrada garantía alguna por esta operación (fs. 66).

En el télex enviado por el Banco Popular de Rosario a la Sucursal Buenos Aires del ex Banco del Chaco S.E.M. el 30.05.85, aquél reconoció haber recibido el monto indicado más los ajustes e intereses al 31.05.85, lo que hacía un total de A 2.535.879,27 (fs. 54/5). En dicho télex se informa, además, la constitución de una garantía por las operaciones mencionadas que consistía en una caución de BONEX Serie 82 a favor del ex Banco del Chaco S.E.M., por u\$s 4.725.000, no pudiéndose ubicar los certificados respectivos, por lo que la veeduría de este último banco se puso en contacto con el interventor del Banco Popular de Rosario, quien al derivar la consulta al responsable del área contable, constató de manera fehaciente que no se encontraban los mencionados certificados ni existía la correspondiente contabilización (fs. 36).

La operatoria descripta evidencia el encubrimiento de un préstamo entre entidades que, además de contabilizarse tardíamente, fue incorrectamente imputado en una cuenta de corresponsalía, reconociendo el Banco Popular de Rosario la deuda existente, la que con intereses incluídos llegaba a A 2.535.879,27 (fs. 36/7 y fs. 66).

Los comprobantes de contabilidad generados en la mesa de dinero de la Sucursal Buenos Aires del ex Banco del Chaco S.E.M., para efectuar el 28 y el 30.05.85 una imputación a pérdidas, por las sumas de A 1.325.190 y A 757.455,78, respectivamente, se glosan a fs. 49/53, correspondiendo remarcar como aspecto de suma importancia que, coincidentemente, el 28.05.85 se le transfirió al Banco Popular de Rosario la suma de A 385.000, y dos días después, el 30.05.85, efectuó el deudor un reconocimiento de la deuda actualizada, situación que no condice con el criterio adoptado ese mismo día -30.05.85- por el ex Banco del Chaco S.E.M., quien denegó efectuar gestión de cobro alguna y, sin haber efectuado reclamo de ninguna índole pasó a pérdida la suma antes indicada de A 2.082.645,78 (fs. 37).

Es decir que las operaciones referidas, que técnicamente implicaban una inversión de fondos para el ex Banco del Chaco S.E.M. con el lógico devengamiento de intereses, fueron pasadas con fecha 28 y 30.05.85 a una cuenta de pérdida (la N° 521-012), lo que provocó que se dieran por cancelados los saldos en la cuenta Corresponsalía, produciéndose así un enmascaramiento de la operación, la cual a partir de ese momento aparece contabilizada como pérdida.

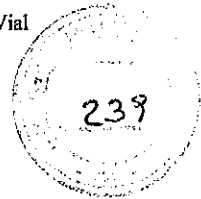
En suma, se observa en esta operatoria el absurdo consistente en que parte de los fondos fueron transferidos al Banco Popular de Rosario y, una semana después, se los pasaba a una cuenta de pérdida, no habiéndose devuelto al ex Banco del Chaco S.E.M. los fondos transferidos ni los intereses devengados, ni tampoco ningún sector de esa entidad bancaria -dada la forma en que quedó contabilizada- procuró su cobro (fs. 66 y vta.).

II - Antonio Ramón LEZCANO (Auditor Externo).

1 - Que en su defensa (fs. 156/78), expresa que su trabajo se extendió sólo hasta el cierre del segundo trimestre producido el 30.06.85, comprendiendo tareas de revisión limitadas para los estados contables trimestrales. Dicha situación le impidió profundizar convenientemente el análisis de algunas cuentas en los tramos finales del cierre trimestral, pero por razones no imputables a él,

- 40 856 36

B.C.R.A.



vinculadas con demoras y deficiencias en el suministro, como en la salida e integración de la información contable, no pudo hacerlo fundamentalmente la relacionada con operaciones correspondientes a la sucursal Buenos Aires.

Además hace alusión a las observaciones y recomendaciones formuladas para los ejercicios 1982 a 1984, para lo cual reproduce parte de informes oportunamente presentados, pretendiendo acreditar que su labor fue mucho más allá del simple cumplimiento de las normas vigentes, atento a las graves deficiencias de organización administrativa y de control que presentaba el ex Banco del Chaco S.E.M. y la sucursal Buenos Aires, comentando luego, que tales deficiencias de control interno hicieron mucho más complicada la tarea de revisión y, mucho más propicias las oportunidades para la comisión de irregularidades.

Arguye que realizó el análisis de las variaciones de las cuentas de resultados para los dos primeros trimestres del ejercicio 1985, de acuerdo con la Circular CONAU-1, pero limitada en una primera etapa, a las operaciones consolidadas para la Administración Central, por las razones apuntadas, manifestando que se dejó constancia "... de la necesidad de profundizar el análisis de las razones de las variaciones en el siguiente trimestre o en oportunidad de la próxima visita a la sucursal Buenos Aires, lo que se diere primero, situación que no pudo concretarse por la duración prematura de nuestra relación contractual con el Banco del Chaco" (fs. 173/4).

Expresa que la tarea del auditor externo se efectúa en base a pruebas selectivas, y tanto el alcance como la oportunidad para la aplicación de los procedimientos mínimos quedan librados a criterio profesional, consignando, también, que se pueden dejar de aplicar algunos de los procedimientos mínimos cuando las cifras involucradas en las cuentas u operaciones no son significativas con los estados contables tomados en su conjunto.

En cuanto a la significatividad de la operación investigada aduce que si la misma es analizada en el conjunto de las transacciones realizadas, en un contexto inflacionario donde los saldos de las cuentas se ven modificados e influenciados por esta situación, tal significatividad se ve relativizada y escapa al estudio que puede efectuarse en base a ponderaciones de razonabilidad o relación lógica de los saldos de las cuentas patrimoniales que los generaron.

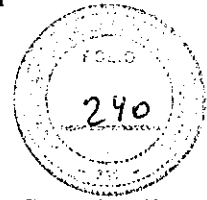
Sostiene que la situación debe ser entendida en el sentido de que eran de su conocimiento las variaciones de las cuentas de resultados en el primer semestre de 1985, incluída la cuenta "Ajuste por otras obligaciones por intermediación financiera", a nivel global, aunque sólo difirió "... la investigación para el análisis de las variaciones anormales a nivel global de sucursales para el siguiente trimestre, y así consta en el acta del 03/07/86" (fs. 175).

Agrega que ello también se corresponde con lo estatuido por la norma que recomienda la aplicación de los procedimientos distribuidos a lo largo del período, y que en el caso de la sucursal Buenos Aires, era obvio que solamente podía analizar las variaciones anormales de sus operaciones, en oportunidad de contar con la información depurada de la misma, situación que sólo se lograría después de la visita anual de auditoría prevista para el siguiente trimestre.

Argumenta que la sucursal Buenos Aires era campo propicio para la comisión de muchas irregularidades, y que no se equivocó ni exageró en sus advertencias sobre el particular, aunque sus recomendaciones no fueron atendidas en la medida que hubiera sido necesario, reiterando que dadas las características de la operación, su forma de instrumentación y registración, ésta fue

SA

B.C.R.A.



realizada con el deliberado propósito de eludir los controles por ser deficientes, confirmado ello por el Departamento de Contabilidad de la Administración Central que no lo detectó.

2 - Que los argumentos esbozados en su defensa no logran conmover la imputación sino que, por el contrario, el reproche se robustece ante la circunstancia de haberse contabilizado una partida como pérdida de A 2.085.645,78, en la cuenta de una sucursal que prácticamente, no observaba movimientos durante el período.

Las comentadas situaciones debieron conducir a efectuar un examen cuidadoso, surgiendo de autos en cambio, que el sumariado aplicó los procedimientos mínimos de auditoría previstos sin ajuste a la normativa en vigor. Tampoco la circunstancia relativa a la inflación de ese momento, puede ser válidamente alegada como elemento que pudiera distorsionar las variaciones de razonabilidad o relación lógica de las cuentas.

Las razones invocadas por el sumariado (demoras y deficiencias en el suministro, salida e integración de la información contable de las sucursales) que le impidieron ahondar, hacia fines del segundo trimestre del año 1985, el análisis de las operaciones que hubieran merecido una observación o reparo de su parte, no resiste el menor análisis, pues el resultado anormal del período no sólo no pudo haberle pasado desapercibido por su naturaleza y significatividad, de haberse efectuado una tarea con la profundidad que correspondía, sino también porque se trataba de la única registración reflejada en la cuenta "Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera" de la mencionada Sucursal Buenos Aires (ver fs. 21).

En ese orden de ideas, el haber diferido para otro trimestre la investigación de diferencias anormales ocurridas en la última porción del primer semestre de 1985, y que no pudo concretar a raíz de su desvinculación con el ex Banco del Chaco S.E.M., deviene como una conducta incorrecta para lograr una desestimación del reproche formulado.

Es decir que los arqueos que practicó, circunscriptos tan sólo a las operaciones consolidadas de la Administración Central, por los motivos esbozados, -demoras en el suministro de la información contable de sucursales-, carecen de basamento sólido que permita justificar la ausencia de control de operaciones realizadas en la Sucursal Buenos Aires, máxime cuando admite el sumariado haber conocido las variaciones de las cuentas de resultados a nivel global.

La inexplicable conducta seguida por el sumariado consiste en haber omitido el análisis de las causas que originaron el cambio en la tendencia de los resultados del período que, de positivos en el orden de A 1.058.053 al 30.04.85, pasaron a negativos por valor de A 1.641.285 al 31.05.85 (fs. 3), y ello es así porque el procedimiento utilizado por el auditor externo no tuvo el alcance y la profundidad necesaria como para establecer, en primer lugar y entre otras falencias, la falta de corrección de los saldos de la cuenta 521-012 "Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera".

Por otra parte, cabe consignar que la norma imputada (CONAU-1) no requiere que el Auditor Externo impida la ejecución de ilícitos o irregularidades, dado que la norma sólo le indica que investigue convenientemente el funcionamiento de la entidad, que revise su contabilidad con toda la papelería respaldatoria, todo ello teniendo en vista las normas dictadas por el Banco Central para el desarrollo de la actividad bancaria y financiera y, por último, que consigne en sus dictámenes todas las observaciones que le merezcan los comportamientos que se apartan de las normas.

[Handwritten signatures and initials]

B.C.R.A.

40350 00



6

El auditor externo debió realizar las pruebas sustantivas imputadas con gran cuidado y diligencia, teniendo en cuenta la finalidad para la cual fueron creados reglamentariamente, los informes para los estados contables trimestrales.

3 - Que la tarea de auditor externo fue instituida reglamentariamente para coadyuvar con las tareas de fiscalización estatal de las entidades financieras, por lo que debió planificar la tarea teniendo en cuenta la finalidad del examen y las características de la entidad financiera que auditaba (cfme. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, sentencia del 25.10.88, causa N° 15.737, autos "Reggiani, Claudio F. (Devoreal S.A.) c/B.C.R.A. s/Resolución 391/87").

En ese sentido, cabe tener presente que: "... En el caso de una entidad financiera la revisión debió comprender pruebas sustantivas apropiadas a su estructura, sus operaciones y a las normas legales aplicables, dados los fines que la información tiene respecto del Banco Central y a los terceros (conf. punto III, B, 2 Resolución técnica N° 7), extremos estos omitidos por el auditor sin que su dictamen haya hecho constar los obstáculos para poder cumplir su cometido conforme las reglas de su profesión" (Sentencia citada).

Por otra parte, cabe expresar que al aceptar la función de auditor externo en una entidad financiera autorizada por este Banco Central, el prevenido aceptó voluntariamente la sujeción a la Ley de Entidades Financieras y, por ende, la posibilidad de ser sancionado en los términos del artículo 41 de la misma, en la eventualidad de que no cumpliera acabadamente con los preceptos de las "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas" que en sus informes declaraba aplicar.

4 - Que en cuanto a las comentadas deficiencias de control interno si bien no tienen entidad suficiente para excusar totalmente la conducta seguida por el sumariado, se tendrá en cuenta al momento de graduar la sanción, que en el informe adicional sobre la Sucursal Buenos Aires se recomendó el 12.07.84 la aplicación de: "... un plan general que permita encauzar definitivamente todos los aspectos deficientes en el sector de corresponsables con el exterior, que se vienen detectando por parte de esta auditoría y que han sido señalados en reiteradas oportunidades" (fs. 190), como así también: "Implementar de inmediato normas operativas y de control para un eficiente manejo del sector, a fin de evitar que el mismo sea un campo propicio para la comisión de irregularidades en perjuicio de la Institución" (fs. 191).

5 - Pruebas: La documental acompañada (fs. 179/94) fue analizada. La documental ofrecida a fs. 177, punto V, subpuntos 1 y 2, fue proveída en el auto de apertura a prueba (fs. 199), la que, no obstante ser cumplida parcialmente (fs. 216/43 y fs. 221), resultó suficiente para examinar los hechos mencionados por la defensa.

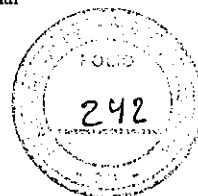
6 - Que por todo lo expuesto, estando probado que el señor Antonio Ramón Lezcano produjo el informe correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 1985, finalizado el 30.06.85, del ex Banco del Chaco S.E.M. (fs. 97/8), que conllevaron a no haber realizado diligentemente las pruebas sustantivas Capítulo II, B. 9, 12, 28, 44 y 47, corresponde atribuirle responsabilidad.

III - Guillermo Rodolfo ORIA (Auditor Externo).

1 - Que en su descargo (fs. 128) ratifica todo lo informado a los veedores ante quienes exhibió los papeles de trabajo, que acreditan el cumplimiento de la normativa vigente, argumentando que es determinante el observar los períodos y fechas de trabajo insertas en el contrato celebrado entre

B.C.R.A.

40350000



7

su equipo de trabajo y el ex Banco del Chaco S.E.M., situación señalada en el primer informe trimestral presentado, correspondiente al período julio/septiembre de 1985, conforme consta a fs. 99/101, que -según él - le exime de responsabilidad.

Aduce que "... se han cumplido los aspectos que a juicio profesional figuran en la Circular CONAU -1 Normas Mínimas - Anexos II y III, tanto para los exámenes trimestrales y de cierre, coincidentes también con las normas técnicas vigentes. Precisamente en nuestros Informes y Papeles de trabajo -algunos de los cuales adjuntamos para agregar a los existentes- se parte de las Normas Mínimas y en este caso especial, precisamente por su significación tanto sobre saldos iniciales como el conjunto al cierre del Ejercicio nos encuadran en los procedimientos observados, que obviamente no tienen sustento" (fs. 128).

2 - Que el sumariado al exhibir sus papeles de trabajo trata acreditar el acatamiento de la normativa vigente, pero con ello no puede pretender anular su responsabilidad por no haber detectado las severas irregularidades de carácter contable ínsitas en la operatoria celebrada por el ex Banco del Chaco S.E.M. y el Banco Popular de Rosario, teniendo en cuenta que él fue la persona especialmente designada para llevar a cabo las tareas de control estatuidas por la Comunicación CONAU-1, labores que constituían la esencia de sus obligaciones y que no cumplió.

Su obligación era dejar sentadas sus observaciones si existían hechos merecedores de ello, no observándose, sin embargo, reparo alguno de su parte en el informe a los estados contables de cierre de ejercicio anual al 30.12.85 sobre la operatoria irregular en cuestión, de lo que se extrae que las pruebas sustantivas no fueron cumplidas adecuadamente.

Las pruebas sustantivas no fueron realizadas con la aplicación y el rigor que era menester de acuerdo con la finalidad para las que están dispuestas, ya que no sólo tienen en mira la corrección de los estados contables sino también el cumplimiento, por parte de las entidades financieras, de las normas reglamentarias dictadas por este Banco Central.

Así lo estimó la justicia al decir: "... dados los fines que la información tiene respecto al Banco Central y a los terceros, y si bien en la aplicación de los procedimientos de auditoría el profesional puede actuar sobre bases selectivas, determinadas según su criterio (conf. Resol. Técnica N° 7 y Anexo II - CONAU-1), ello no obsta el cuidado de planificar la tarea teniendo en cuenta el objeto del examen y la característica de aquélla" (Cámara Nacional de Apeaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, causa n° 16.196, autos "Olivieri, Marcelo A. s/apel. Resolución N° 204/87 del B.C.R.A.", sentencia del 18.11.88, Considerando III, punto 2).

3 - Que las irregularidades de la operatoria descripta en el Considerando I, puntos 1 y 1.1, no fueron intrascendentes, ni pudieron pasar inadvertidas de haber desarrollado el señor Oria su tarea de acuerdo a las normas imputadas, dirigidas en lo principal a asegurar la importancia de la tarea que, en la mayoría de los casos, resulta la base para tomar decisiones que afectan tanto a la entidad bancaria que emitió los estados contables como a aquéllos con que ella se relaciona.

Ahora bien, el sumariado invoca a su favor una limitación al alcance de las tareas de auditoría, según la opción prevista en el apartado 11.3 de las Normas de Auditoría contenidas en la Resolución Técnica N° 7 de Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, habiendo dejado asentado en el informe correspondiente al 31.12.85 lo siguiente: "la contratación de la auditoría fue realizada por el período que se inicia el 1 de julio de 1985, motivo por el cual, el trabajo

59

- 40356 86

B.C.P.A.



8

de examen tiene apoyatura en los saldos que hasta dicha fecha realizara el equipo de auditores que nos precediera" (fs. 27/8 y fs. 102).

La comentada restricción no corresponde ser considerada dado que no fue receptada en el párrafo de opinión del informe correspondiente.

4 - Pruebas: La documental acompañada (fs. 129/55) ha sido convenientemente evaluada.

5 - Que por todo lo expuesto, estando probado que el imputado produjo el informe de los estados contables de cierre de ejercicio anual al 30.12.85 del ex Banco del Chaco S.E.M., que conllevaron a no haber realizado diligentemente las pruebas sustantivas Capítulo I, B. 9, 12, 28, 44 y 47, corresponde atribuir responsabilidad al señor Guillermo Rodolfo Oria.

IV - CONCLUSIONES.

1 - Que por todo lo expuesto, corresponde sancionar a las personas físicas halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21.526, graduando las penalidades en función de las características de las infracciones y ponderando las circunstancias y formas de su participación en los ilícitos.

Atento a la entidad de los cargos y magnitud de las infracciones y de acuerdo al grado de participación en los ilícitos, es pertinente sancionar a los encartados con la sanción prevista en el inciso 3) del artículo 41 de la ley N° 21.526.

Para la graduación de la sanción se tiene en cuenta la Comunicación "A" 3579.

2 - Que la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias ha tomado la intervención que le compete.

3 - Que de acuerdo con las facultades conferidas por el art. 47, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aclarado en sus alcances por el Decreto 13/95, el cual fue puesto en vigencia por la ley 25.780, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

RESUELVE:

1º) Imponer las siguientes sanciones en los términos del inciso 3) del artículo 41 de la Ley N° 21.526:

- Al señor Antonio Ramón LEZCANO: multa de \$ 20.000 (pesos veinte mil).
- Al señor Guillermo Rodolfo ORIA: multa de \$ 40.000 (pesos cuarenta mil).

2º) El importe de las multas mencionadas en el punto anterior deberá ser depositado en este Banco Central en "Cuentas Transitorias Pasivas - Multas - Ley de Entidades Financieras - Artículo 41",

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

B.C.P.A.

- 40356 80

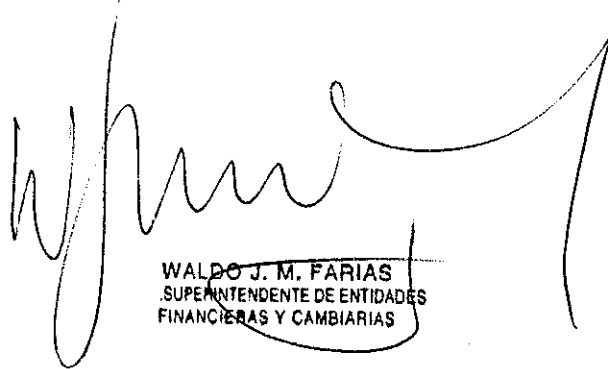


9

dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley 21.526.

3º) Notifíquese con los recaudos que establece la Comunicación "A" 4006 del 26.8.03 (B.O. 3.9.03), Circular RUNOR 1-645, Sección 3, en cuanto al régimen de facilidades de pago oportunamente aprobado por el Directorio, por el cual podrán optar -en su caso- los sujetos sancionados con la penalidad prevista por el inc. 3º del artículo 41 de la Ley N° 21.526.

4º) Notificar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente la sanción impuesta a los señores Antonio Ramón LEZCANO y Guillermo Rodolfo ORIA.


WALDO J. M. FARIAS
SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

10-11-